

El Salvador proceso

informativo semanal

año 10
número 388

junio 14
1989

ISSN 0259-9864

centro universitario de documentación e información

- El asesinato de Rodríguez Porth
- Reacciones al asesinato
- Actividad bélica
- Temores y exigencias populares ante el nuevo gobierno
- La economía en un discurso nacionalista
- Más gestiones de la OEA en Panamá

El asesinato de Rodríguez Porth

Una vez más la violencia enluta a la sociedad salvadoreña, en esta ocasión con el execrable asesinato del Dr. Antonio Rodríguez Porth. Los más diversos sectores nacionales han sido unánimes en que este tipo de hechos es condenable, humanamente intolerable y políticamente burdo e inaceptable; razonamiento que es perfectamente válido y aplicable para con la tortura y asesinato de sindicalistas y opositores al régimen.

Una vez aceptada la unanimidad en el rechazo a semejantes procedimientos, bien pueden diferenciarse distintas lecturas, y hasta posibles instrumentalizaciones de esta actitud, subyacentes en las diversas fuerzas políticas y sociales del país. De partida el propio gobierno salvadoreño responsabilizó del crimen al FMLN, sin esperar resultado alguno de las investigaciones de rigor. No es que al gobierno le falten argumentos para semejante apreciación, cuando el FMLN ha recurrido en los últimos meses a tácticas de guerra que provocan daños en la población civil, facilitando la labor propagandística y desinformadora de COPREFA y otros sectores de ultraderecha; la misma vaguedad y ambigüedad que ha mantenido el discurso de dirigentes rebeldes en contra de ARENA se presta perfectamente a que se les atribuya la responsabilidad de este tipo de atentados. Pese a ello resulta aventurado proceder como lo ha hecho el gobierno, habida cuenta de los múltiples asesinatos cometidos por la ultraderecha y a su radicalismo irracional.

Sin embargo, aun cuando el crimen lo hubiesen ejecutado cuadros de la insurgencia no es nada evidente que éste haya sido producto de una definida política rebelde. En repetidas ocasiones el mismo ejército ha deplorado que por actos terroristas e injustificados cometidos por algunos de sus oficiales se pretenda desprestigiar la institución armada. Aún más, habiendo el ejército atribuido a la guerrilla la matanza de San Sebastián el pasado mes de septiembre, en su cuarta y final versión ofrecida 5 meses después del hecho admitió la culpabilidad y engaño de un mayor y otros oficiales. El FMLN ha solicitado 72 horas para pronunciarse sobre el asesinato del Dr. Rodríguez, lo que revelaría el desconocimiento de su dirigencia. Con todo, sea que admitieren culpabilidad o la rechazasen, ello es signo de cierto descontrol y confusión en algunos de sus cuadros, situación a la que la Comandancia General debería prestar inmediata atención.

En lo que sí ha respondido ponderadamente el Pdte.

Cristiani es en descartar que el hecho vaya a suponer un cierre a los virtuales espacios de diálogo que abriera en su discurso inaugural; actitud que es más consecuente con el supuesto de que semejantes asesinatos no constituyen política oficial del FMLN que con los presuntos planes incautados a la insurgencia y con los que la Fuerza Armada acostumbra presentarse ante sucesos de esta índole.

La reacción del gran capital, aglutinado en ANEP, se mueve en una línea diferente, en aparente oposición a las iniciativas de diálogo y negociación privilegiadas por la inmensa mayor parte de las fuerzas sociales del país. ANEP, al menos a nivel publicitario, decretó un paro de actividades empresariales, pretendiendo convertirse en el abanderado de una justa causa contra el terrorismo, alternativa a la causa popular por una paz negociada. Lo anterior no tendría mayores inconvenientes si no encerrase una muy parcial e ideologizada interpretación de lo que es terrorismo; pero sobre todo incurre en el grave error de poner como problema principal lo que sólo es secuela envilecedora de la guerra. Semejante inversión de términos no sólo desplaza la guerra y sus causas como el mal estructural a combatir sino que tiende a justificarla como legítimo instrumento de defensa contra el terror.

No podría encontrarse manera más sutil de respaldar una salida militar al conflicto nacional, ni modo más eficaz de apoyar el largamente acariciado intento de los belicistas de ARENA de involucrar a la totalidad de la población civil en su proyecto de guerra.

ANEP no parece aprender las lecciones de la historia. Su cerril y obtusa oposición a abrirle espacios a la presión económica y social en 1976, impidiendo la realización de una tímida reforma agraria desembocó en el gravísimo y prolongado conflicto que ha padecido el país en la presente década. Con igual obcecación se opone ahora a una solución política negociada a la guerra; el año pasado negándose airadamente a dialogar con todas las fuerzas sociales de la nación en la búsqueda de un consenso para alcanzar la paz y actualmente alzando la bandera antiterrorista.

Y no es que no pueda caerse en peores niveles de violencia con brotes de desenfrenado terrorismo, cuyo desencadenamiento siempre resulta imprevisible en el marco de una guerra como la que padecemos; terror que escaparía al control de la Fuerza Armada y del FMLN. Así, pese a su retórica nacionalista, no resulta nada patriótico que estos empresarios continúen propiciando tal posibilidad, cuando serían los primeros en ponerse a buen resguardo, al lado de sus capitales en el exterior.

Reacciones al asesinato

El asesinato del Ministro de la Presidencia, Dr. José Antonio Rodríguez Porth, perpetrado en la mañana del viernes 9 de junio recién pasado, junto al de sus acompañantes, Gilberto Carranza (motorista) y Benjamín Pérez Jiménez (ordenanza) ha venido a sumarse a un ambiente de extremada polarización político-militar y de exacerbado debate ideológico. Además de la particular trayectoria biográfica del Dr. Rodríguez Porth, el contexto objetivo en cuyo marco ha acontecido su asesinato hacen de éste un suceso de singular importancia para la marcha del proceso político salvadoreño en el futuro inmediato.

Las credenciales del Dr. Rodríguez Porth como jurisconsulto, académico, político, polemista e ideólogo empresarial han sido ampliamente difundidas por la prensa. Fundador de ARENA y director asesor del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) de dicho partido, así como miembro del consejo asesor de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria, Rodríguez Porth abandonó este último cargo a finales de mayo, para asumir el Ministerio de la Presidencia que le ofreció el Presidente Cristiani.

En los inicios de su trayectoria de hombre público, el Dr. Rodríguez Porth se desempeñó como secretario de la Asociación General de Estudiantes Universitarios (AGEUS) durante 1938-39 y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador. Asimismo, fue subsecretario de Relaciones Exteriores y Justicia durante los mandatos de los generales Andrés Ignacio Menéndez y Salvador Castaneda Castro. Posteriormente, fue diputado a la Asamblea Legislativa entre 1947-48, miembro del directorio cívico-militar surgido del golpe de

Estado de enero de 1961, candidato presidencial del PPS para las elecciones de 1972, miembro de la comisión técnica de la cancillería entre 1973 y 1979, ministro de relaciones exteriores durante el último período del coronel Molina y durante el gobierno del general Romero, y diputado suplente de ARENA por San Salvador a partir de las elecciones de marzo de 1988. De modo particular, durante el período presidencial del Ing. Duarte, Rodríguez Porth apareció siempre a la cabeza de todas las batallas decisivas libradas por el gran capital contra lo que estimaba como injerencismo estatal en la esfera privada. Quizá la más importante la libró con ocasión de la promulgación del impuesto para la defensa de la soberanía nacional, decretado por el gobierno democristiano a finales de 1986 (Proceso 270). El Dr. Rodríguez Porth tenía una amplia experiencia en este terreno, tras haber peleado en 1969, como miembro de la Federación de Asociaciones de Abogados, contra las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Reacciones de condena

Las reacciones de condena al asesinato del Dr. Rodríguez Porth han sido virtualmente unánimes y han abarcado un amplio espectro de fuerzas sociales y políticas. Significativamente, la inmensa mayor parte de éstas se ha pronunciado por una respuesta prudente, aunque firme, al asesinato, y han evitado atribuir apriorísticamente responsabilidades concretas, si bien una serie de indicios parecería apuntar en dirección de la izquierda político-militar.

ARENA ha presentado, como es psicológicamente comprensible, las protestas más vehementes. El comunicado difundido

el 10 de junio por el COENA responsabiliza-
ba del crimen a las "hordas terroristas del
FMLN-FDR". En esta misma línea, el coronel
Sigifredo Ochoa Pérez habría deplorado que
"mientras los cabecillas que planean y orde-
nan crímenes transitan libre e impunemente,
y hasta se dan el lujo de dar conferencias de
prensa, nuestros más grandes valores son
asesinados". Al propio tiempo, Ochoa Pérez
puntualizó que "no debe temblarnos la mano
para actuar contra el terrorismo de la guerrilla".
En apoyo de este tipo de valoraciones,
el director general de la Policía Nacional,
coronel Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, no
ha vacilado en responsabilizar al FMLN, el
cual pretendería "presionar al Gobierno para
negociar una cuota de poder". Según lo
aseguró el coronel Guzmán Aguilar, desde
hacia varias semanas la Policía tenía cono-
cimiento de planes del FMLN para atentar
contra funcionarios del gobierno.

En cambio, en el comunicado difundido
el 12 de junio (aunque fechado el 9 de junio),
además de moderar el tono de la condena,
ARENA responsabiliza sólo al FMLN, tal vez
después de recapacitar sobre el despropósito
de involucrar al FDR en el asesinato. El
Presidente Cristiani, en particular, ha mos-
trado una moderación que jamás hubiesen
sospechado quienes siguen pensando en
ARENA como un partido esencialmente es-
cuadronero o, por lo menos, en el que el
sector escuadronista detenta la hegemonía.
En sus primeras declaraciones de prensa
tras el hecho, Cristiani expresó que "esta-
mos casi totalmente convencidos de que es
una acción del FMLN para tratar de provocar
reacciones de parte de nuestro gobierno".
Empero, en el mensaje oficial en torno al
asesinato, pronunciado el mismo día, evitó
responsabilizar explícitamente al FMLN.
Más bien, condenó a "las fuerzas oscuras
que no quieren la paz, ni la reconciliación, ni
la concordia, ni el progreso de la patria"; pero
al propio tiempo aseguró que "no vamos a

perder la serenidad...no nos dejaremos pro-
vocar para que el país se hunda más en la
vorágine de la violencia". De modo genérico,
pero importante en lo que tiene de compro-
miso, subrayó que "vamos a responder con
la ley". Asimismo, prometió que tal provoca-
ción no lo haría retractarse del ofrecimiento
de diálogo formulado en su discurso inau-
gural del 1 de junio.

Esta posición le ha valido el respaldo de
numerosos sectores, empezando por el del
Arzobispado de San Salvador, cuyas expec-
tativas previas sobre la gestión de ARENA
han albergado en conjunto bastante escepti-
cismo. Así, en su homilía dominical del 11
de junio, el obispo auxiliar de San Salvador,
Monseñor Gregorio Rosa Chávez, tras de-
clarar que no vacilaba en calificar el asesi-
nato del Dr. Rodríguez Porth como "acto
terrorista", manifestó el respaldo de la Iglesia
a "la posición serena y conciliadora asumida
por el señor Presidente Cristiani, a pesar de
la justa indignación que le ha producido el
asesinato de uno de sus más cercanos
colaboradores". También el Arzobispo, Mon-
señor Arturo Rivera Damas, aplaudió la
medida con que estaba respondiendo el
gobierno de Cristiani, pero expresó su temor
de que "grupos radicalizados tomen la ley en
sus manos y haya represalias".

El grueso de los partidos políticos ha
coincido en la necesidad de adoptar una
posición mesurada y no manipular el asesi-
nato del Ministro de la Presidencia como
pretexto para desencadenar un baño de
sangre mayor. Así, el PDC ha señalado que
"no es por medio de la violencia que se
solucionarán los problemas del país ni es la
forma de dirimir las diferencias ideológi-
cas...Esperamos que este hecho condena-
ble no nos conducirá a una escalada de
violencia y venganza que únicamente
polarizará más la sociedad salvadoreña".
Por su parte, el Movimiento Auténtico Cri-
stiano (MAC) formuló su deseo de que "este

hecho no se convierta en un inicio de la profundización de la violencia, sino más bien en motivo de profunda reflexión sobre la imperiosa necesidad de encontrar unidos, lo antes posible, el camino de la paz". El secretario general del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), Dr. Guillermo Ungo, expresó que su partido condenaba el hecho "venga de donde venga", al tiempo que externó su preocupación de que el mismo desencadene "una respuesta violenta" de los grupos más radicales de ARENA, con lo cual se entraría "en una espiral de violencia de nefastas consecuencias". Por su parte, la Unión Democrática Nacionalista (UDN) manifestó que el asesinato de Rodríguez Porth "no contribuye a la concertación del amplio diálogo de todos los sectores de nuestra sociedad, que nos lleve a la finalización del conflicto", al tiempo que expresó su deseo de que el nuevo gobierno y el partido ARENA "actúen con responsabilidad y no utilicen este lamentable hecho como detonante para desatar acciones que conduzcan al país a una mayor espiral de violencia".

Las condenas del movimiento laboral no han sido ni muy numerosas ni muy enérgicas. Con todo, destaca la de la Unión Nacional Obrero Campesina (UNOC), cuya dirigencia manifestó que "con este tipo de acciones no se consolida la democracia, y al contrario, se alejan las posibilidades de encontrar la paz". Otras fuerzas sociales, como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y la Universidad de El Salvador (UES), también han repudiado enérgicamente el crimen. En un comunicado emitido el mismo día del asesinato, la UCA reprobó el hecho como "antipatriótico, al dificultar con él las posibilidades de un arreglo político y democrático al conflicto, de una despolarización social y de un desescalamiento de la violencia"; y subrayó que el asesinato del Dr. Rodríguez Porth "se constituye por sus especiales circunstancias

en una acción contra todo el pueblo de El Salvador". Por su parte, el rector de la UES, Lic. Luis Argueta Antillón, manifestó que dicha institución "siempre ha sostenido que las ideas se combaten con ideas y como universidad humanista consideramos que el respeto a la vida de todas las personas es un derecho humano primario y fundamental que no debe ser violado por nadie".

Internacionalmente, el asesinato ha suscitado considerable repudio, tanto de numerosos gobiernos como incluso de organizaciones tradicionalmente muy críticas del gobierno salvadoreño y del partido ARENA, como America's Watch. A nivel regional, los gobiernos de Guatemala, Honduras y Costa Rica han manifestado una enérgica condena al hecho y expresado su solidaridad con el gobierno de Cristiani. El Presidente Oscar Arias, en particular, calificó el hecho como "acto de terrorismo que repudiamos con vehemencia", si bien al mismo tiempo subrayó que "el dolor causado por una guerra tan injusta como cruel pone una vez más de relieve la urgencia de un diálogo, sin el cual el derramamiento de sangre del pueblo salvadoreño seguirá indefinidamente". Extraregionalmente, el Presidente Carlos Andrés Pérez expresó su repudio a "este abominable acto como dirigido a frustrar la decisión del nuevo Gobierno salvadoreño de reiniciar las negociaciones de paz convenidas en los acuerdos de Esquipulas II y en la última reunión de Presidentes centroamericanos celebrada en Tesoro Beach, El Salvador". El Secretario de Estado para asuntos extranjeros del gobierno británico, Sir Geoffrey Howe, calificó el asesinato como "acto brutal y cobarde".

La interpretación contenida en la condena formulada por Estados Unidos ha sido fundamentalmente homogénea con la de los diferentes sectores nacionales e internacionales. El embajador William Walker calificó el hecho de "execrable acto de terror" y

afirmó que "los motivos que rodean este brutal asesinato son totalmente claros; se ajustan al patrón de otros actos similares recientes, de asesinatos y actos terroristas. Hacer actos tan atroces y repugnantes, que provoquen al gobierno o a otros, a responder en la misma forma". A nombre del Departamento de Estado, la portavoz Margaret Tutwiler calificó el asesinato como "indignante" y "perverso" y lo interpretó como orientado a "provocar una reacción violenta del gobierno y la Fuerza Armada de El Salvador". Por su parte, el vicepresidente Dan Quayle declaró el 9 de junio en Washington que el objetivo de actos como ése "es matar la democracia". Según un testigo presencial de la reunión que Quayle sostuvo ese día con los embajadores de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, para preparar su visita a la región, el Vicepresidente norteamericano habría comentado al término de la reunión tener la convicción de que la guerrilla era la responsable del asesinato del Dr. Rodríguez Porth. "Sabemos quién lo hizo: fue el FMLN, que tiene al apoyo de Nicaragua y Cuba", habría declarado Quayle.

La posición del FMLN

Trascurridos más de tres días desde el asesinato, el FMLN todavía no se pronunciaba al respecto. Este hermetismo fue inmediatamente interpretado como admisión de culpabilidad. En conferencia de prensa ofrecida el 13 de junio en su despacho municipal, el alcalde capitalino y presidente de ARENA, Dr. Armando Calderón Sol, expresó al respecto que el FMLN no se responsabilizaría del asesinato "porque hasta ellos se sienten horrorizados y avergonzados de tan repugnante delito; no se harán responsables porque también esa acción es parte de la guerra sucia y política que ellos llevan a cabo para atemorizar al pueblo salvadoreño". En relación al mismo punto, el propio

Ungo comentó que, efectivamente, el silencio que el FMLN estaba guardando frente al asesinato "es sospechoso. Me parece que es momento de que haya dado una declaración pública asumiendo el hecho o negándolo". "El FMLN —añadió Ungo— debe tener una política clara. Si está en una línea de realizar atentados contra funcionarios civiles o no; y de decir: esto no le corresponde a nuestra línea, o sí le corresponde. Pero ese silencio nos preocupa y se hace muy sospechoso". Asimismo, Ungo manifestó que, "independientemente de quien haya realizado ese asesinato, es un asesinato y una estupidez política. Yo estimo que si el FMLN se hiciera cargo de ese crimen, se vería seriamente lesionada su credibilidad política y significaría una desacumulación muy importante en su contra".

Finalmente, a través de la emisión vespertina de Radio Venceremos del 12 de junio, el FMLN anunció que aunque hasta ese momento no había recibido ningún reporte de que el asesinato del Ministro de la Presidencia hubiese sido ejecutado por comandos suyos, iniciaría una investigación del caso; y prometió que "en el término de 72 horas daremos a conocer nuestra posición definitiva para aclarar los elementos de juicio necesarios si hay alguna responsabilidad en la acción en cuestión".

Cualesquiera sean los resultados de la investigación ordenada por la Comandancia guerrillera, las consecuencias que han de seguirse en lo inmediato del asesinato del Dr. Rodríguez Porth previsiblemente afectarán de modo considerable la búsqueda de una solución política al conflicto, tanto en términos de inflexibilizar la disposición gubernamental a dialogar como de legitimar un eventual recrudescimiento de la estrategia de contrainsurgencia a todos sus niveles, como ya se empieza a anunciar a nivel jurídico, en el sentido de aprobar una legislación anti-terrorista *ad hoc* más drástica.

Actividad bélica

FLAGELO: En un comunicado difundido el 12.06, ANEP expresa "su más enérgica condena frente al alevoso y malvado asesinato del Dr. José Antonio Rodríguez Porth, como parte de la escalada de violencia terrorista en nuestro país, hecho que ha desencadenado el repudio y la indignación no sólo de los sectores empresariales, sino de todo el pueblo salvadoreño". En opinión de ANEP, "el pueblo está consciente de que esta execrable acción es una más de aquellas perpetradas por las fuerzas del mal, empeñadas en impedir la consolidación del sistema democrático en nuestro país. Por otra parte, la conciencia ciudadana considera que la situación que ha venido imperando y recrudeciéndose día a día, año con año, es totalmente intolerable y que es preciso y urgente que se adopten las medidas legales que sirvan para preservar la seguridad e integridad de la sociedad salvadoreña. Por lo mismo, ANEP expresa su firme convicción de que la totalidad del pueblo respaldará consciente y resueltamente toda actuación del Gobierno de la República en el cumplimiento fiel del mandato que le impone la Constitución, como son la defensa de la vida, la seguridad y bienes de los habitantes, así como garantizar la soberanía nacional y la integridad territorial, pues sin todo ello no será posible que haya paz ni desarrollo".

Tras el segundo paro nacional al transporte terrestre (Proceso 387), aun cuando en términos generales la actividad militar ha experimentado una relativa disminución, algunas áreas, especialmente en las zonas norte y oriental, han sido escenario de fuertes y prolongados combates entre las unidades guerrilleras y la tropa gubernamental, así como de un ininterrumpido accionar menor de desgaste y sabotaje.

A lo largo de la primera quincena de junio el FMLN no parece haber ejecutado ninguna acción mayor que puede ser considerada de gran envergadura. Aparte de 2 ó 3 acciones coordinadas de mediana envergadura y sin resultados significativos, la casi totalidad de acciones reportadas han sido producto de combates de encuentro. Tal situación, y así parece intuirlo el alto mando de la Fuerza Armada (FA), bien podría deberse a un momentáneo repliegue del ejército guerrillero, en función de la ejecución de futuras acciones estratégicas a nivel nacional.

Por su parte, la FA, especialmente tras los recambios realizados en la cúpula y cadena de mandos, no ha dado muestras de mayor actividad de carácter ofensivo en los teatros de operaciones. Ello se explicaría, en parte, por los reacomodos tácticos, que aunque menores, los nuevos jefes están dispuestos a implementar a nivel de la operatividad de sus unidades y, en parte, por las expectativas de la alta oficialidad en torno a una virtual renovación de los esfuerzos ofensivos del FMLN.

Sin embargo, pese a este relativo descenso en el nivel de las operaciones por ambas partes, el quehacer bélico no ha dejado de ser una de las más importantes constantes en la vida nacional. De acuerdo a los informes militares proporcionados por las partes, aunque a niveles menores que en otros momentos, las acciones armadas han permanecido ininterrumpidas.

En este contexto, el 03.06 fuentes castrenses reportaron un hostigamiento guerrillero contra una base militar que da seguridad a instalaciones de comunicación localizadas en el cerro Cirimba, de Gotera, en Morazán. Según el informe, los combates no causaron mayores resultados. Por su parte, Radio Venceremos informó, el 07.06, de la realización de una nueva operación militar contra el nuevo gobierno, que incluyó ataques a posicio-

nes militares en por lo menos una docena de poblaciones de 7 de los 14 departamentos del país, con saldo de unas 10 bajas en el ejército. Entre las operaciones rebeldes se encuentran la destrucción de una bodega de insumos agrícolas en el beneficio cooperativista "El 77", y un ataque contra el puesto de seguridad de una subestación de CEL, ambos en jurisdicción de Chalchuapa, en Santa Ana. Otros hostigamientos de regular magnitud se registraron en las poblaciones de San Miguel de Mercedes y San Antonio Los Ranchos, en Chalatenango. Además se atacaron posiciones militares periféricas en el sur de la ciudad de San Vicente; en Villa Victoria, Cabañas; y en la ciudad de Jucuapa, en Usulután.

Fuentes castrenses también reportaron fuertes combates en un área de 7 kms localizada entre las poblaciones de Jiquilisco, San Francisco Javier, y San Agustín, todas del departamento de Usulután. Por otra parte, en lo que a acciones urbanas se refiere, los comandos insurgentes han realizado una serie de acciones menores con las que han mantenido continuidad en su operatividad, especialmente en San Salvador y su periferia.

De esta suerte, el 05.06, comandos urbanos destruyeron las oficinas de ANTEL localizadas en la ciudad de Soyapango, al oriente de la capital. Días después, el 09.06, fue atacada la casa cuartel de la defensa civil en la misma localidad, resultando 3 efectivos heridos. También fue dinamitada una gasolinera ubicada al norte de San Salvador, y el 10.06 se realizaron por lo menos 6 atentados dinamiteros contra agencias bancarias y asociaciones de ahorro y préstamo en San Salvador, Ciudad Delgado, Soyapango y Santa Tecla.

Finalmente, de acuerdo a reportes militares proporcionados el 12.06 por el alto mando de la FA y Radio Venceremos, las bajas entre ambos bandos suman 264 en lo que va del mes. Radio Venceremos aseguró que los rebeldes ocasionaron un total de 200 bajas, entre muertos y heridos, en ese período. Mientras que COPREFA sostuvo que el FMLN sufrió un total de 29 muertos y 35 heridos.

PROTESTA: Como una medida de apoyo a los tres días de duelo decretados por el Presidente Cristiani en memoria del Dr. José Antonio Rodríguez Porth, y muestra de repudio al terrorismo que segó la vida del Ministro de la Presidencia, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y el Consejo Nacional Permanente de la Pequeña Empresa (CONAPES) decretaron un paro empresarial de cuatro horas en la tarde del martes 13 de junio. Los organizadores aseguraron que el paro constituyó un "rotundo éxito".

DRASTICIDAD: Al repudiar el asesinato del Dr. Rodríguez Porth, el alcalde de San Salvador y presidente de ARENA, Dr. Armando Calderón Sol señaló en conferencia de prensa ofrecida el 13.06 en su despacho municipal, que "es necesario revisar la legislación para corregir las fallas existentes, e incorporar penas para nuevos delitos que han surgido como consecuencia de la violencia política del marxismo-leninismo", tal como lo habrían hecho países con vocación democrática como Francia y España, para enfrentar el terrorismo. En la misma línea, el presidente de la Asamblea Legislativa, Lic. Ricardo Alvarenga Valdivieso, reiteró la disposición de dicho Organismo a estudiar "medidas para defender a los funcionarios y actuar contra los terroristas del FMLN".

Temores y exigencias populares ante el nuevo gobierno

MISIVA: Según información difundida por diario El Mundo en su edición del 12.06, el FMLN habría hecho llegar a la empresa privada una misiva encaminada a "iniciar un diálogo para buscar puntos de coincidencia, por mínimos que sean, al menos para ganar una confianza suficiente que permita opciones de solución que nos acerquen a la paz". Como un inicio en esta dirección, el FMLN manifiesta su "disposición a discutir y negociar directamente con ustedes: lo relativo al sabotaje dirigido contra la economía; primeros intercambios sobre las características generales del modelo económico social y político a construir, que exprese los intereses de todos los sectores y satisfaga las necesidades y promoción de las mayorías; el carácter de las relaciones con los Estados Unidos; y la reconstrucción del país". También menciona que se negociaría "la posibilidad de alcanzar las concertaciones en aspectos como Reforma Agraria, salarios y precios, libertad de organización y demás derechos laborales, sistema financiero, deuda externa, inversión extranjera, sistema tributario, libertad de información, reunión y manifestación, derechos humanos en general, etc.". A tal efecto, el FMLN se manifiesta dispuesto a "corresponder a cualquier forma de diálogo por medio de representación gremial u otras variantes que ustedes decidan, colectivas o individuales, en privado o en público".

Las diversas organizaciones populares de comunidades, laborales, campesinas y cooperativas, así como las organizaciones de solidaridad internacional y de promoción humana que operan en el país parecen haberse dado a la tarea de presentar al nuevo gobierno, por un lado, una exigencia de que las promesas esperanzadoras hechas por el Pdte. Cristiani sean cumplidas; y por otro, a la presentación de sus respectivas plataformas reivindicativas, así como a expresar sus temores ante cuál sea la dinámica a que el nuevo gobierno intentará conducir al movimiento popular organizado y cuál será entonces su política de respeto a los derechos humanos y su decisión de hacer esfuerzos porque éstos sean respetados por los grupos paramilitares que, en lo que va del año, han venido dando muestras de mantenerse activos (**Proceso 387**).

En efecto, la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños (ANIS) no gubernamental, en su comunicado de prensa de fecha 06.06 ha pedido al Pdte. Cristiani que cumpla las promesas presentadas durante su discurso de toma de posesión, y que haga esfuerzos efectivos porque en El Salvador ya no se mate, se capture o se viole "a la hora que les da la gana". La UNOC, por su parte, en un amplio campo pagado ha exigido al nuevo gobierno que oriente su esfuerzo en función de la búsqueda de la paz, el respeto a los derechos humanos, a los derechos sindicales, a la libertad de expresión y las reformas estructurales, así como a la solución de las crisis económica y al manejo adecuado de la deuda externa. En la misma línea, FEASIES, MCS y otros han presentado sus respectivas plataformas reivindicativas.

Sin embargo, a reservas de la recentísima instalación del nuevo gobierno, y de que ello aún podría eximirles de responsabilidad de las actuales acciones institucionales de represión contra las organizaciones populares, las denuncias de desapariciones, capturas a sus bases y cercos militares a sus locales, continúan a un ritmo, si bien no tan grave como en otros momentos del

año que transcurre, sí a un nivel preocupante. Así, el Sindicato de Obreros de la Industria de la Construcción (SOICSCES) denunció en un comunicado de prensa difundido el 08.06 que elementos del Batallón Atlacatl penetraron el 06.05 a las instalaciones del proyecto de construcción COGEFAR, disparando y procediendo a su vez a catear las instalaciones y saquear objetos y dinero de propiedad de los trabajadores y de la subseccional sindical; según el comunicado, el hecho se enmarca "dentro del plan represivo de ARENA, el Alto Mando y la embajada USA en contra de los trabajadores".

En el mismo orden, el Sindicato de Empresa de Trabajadores de ANDA (SETA) denunció a la prensa el pasado 07.06 que la orden dictada por el presidente saliente de la institución, de prohibir la entrada a las instalaciones de ANDA a los trabajadores miembros directivos del sindicato, continúa vigente en la nueva administración, presidida por el Cnel. González Suvillaga, eso añadido a que según la directiva sindical "al parecer los vigilantes se sienten ahora más prepotentes con el nuevo presidente y esto traerá consecuencias graves". Sin embargo, el SETA informa haber presentado ya su primera solicitud de audiencia con el nuevo presidente para discutir el problema y sus demandas. Asimismo, la Federación de Cooperativas de Consumo (FEDECONSUMO) ha denunciado y condenado la captura de un miembro de FUNPROCOOP el pasado 25.05, y tres de COACES el mismo día. Estos últimos fueron puestos en libertad el 26.05.

En otra línea, **El Diario de Hoy** informa que el pasado 07.06 fue capturado Bertilio Cartagena Orellana, miembro de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA), acusado de portar documentos propagandísticos del FMLN en la población de San Francisco Morazán. El mismo rotativo en su edición del 07.06 informa que el ejército incautó armas y material bélico en general en una casa de seguridad vinculada con la Unión Nacional de Desplazados (UNADES) que, según esta información, funciona bajo la dirección de las FARN, miembro del FMLN.

Todo ello converge en configurar un momento coyuntural de preocupada espera nacional de la definición del camino en que se iniciará el nuevo gobierno y, para los trabajadores, de la instalación de una política laboral favorable que, hasta ahora parece olvidada.

RECHAZO: Según información difundida por diario El Mundo el 05.06, la Comandancia General rechazó frontalmente la propuesta de diálogo contenida en el mensaje presidencial del 1 de junio porque "ésta no tiene nada sustantivo y es una oferta de rendición". Según el FMLN, "Cristiani midió las palabras para dar una imagen aceptable al Congreso norteamericano y a la comunidad europea, pero en su contenido el discurso fue predominantemente de confrontación, estrictamente fiel a los intereses políticos y económicos del partido ARENA; mostró una concepción de política exclusivista y un plan de represión y endurecimiento de la guerra apoyándose en medidas fascistas, que ellos mismos califican como guerra legal". "Fundamentalmente —agrega el FMLN— Cristiani cumplió con la formalidad de hablar de diálogo, pero ni siquiera mencionó la necesidad de una solución política —negociada. En el fondo, plantea el absurdo de una rendición y un día después lo dejó más claro al hablar de la desmovilización del FMLN. Desconoce todos los avances logrados en este terreno; comienza otra vez por los procedimientos; antepone la supuesta inviolabilidad de la Constitución como precondition para bloquear un entendimiento realista, intenta hacer el diálogo por el diálogo y ganar tiempo e imagen sin negociar ni dar solución política al conflicto".

La economía en un discurso nacionalista

COMITE: El coordinador del Comité Permanente del Debate Nacional por la Paz, Reverendo Edgard Palacios, exhortó el 07.06 a las fuerzas sociales del país a unirse "para que de manera pacífica y patriótica exijamos a las partes en conflicto la terminación de los rechazos mutuos a sus propuestas de paz" y exigió de éstas que "hagan sacrificios en sus posiciones a fin de demostrar en la práctica su voluntad política de terminar con la guerra por la vía del diálogo y la negociación política y que en la búsqueda de la paz firme y duradera el primer encuentro se dé sin condiciones previas y con presencia de los representantes de los partidos políticos y de las fuerzas sociales". Asimismo, a nombre del Comité, el Reverendo Palacios solicitó a las partes involucradas en el conflicto que "tomen en cuenta con responsabilidad la Plataforma Política por la Paz que estaremos aprobando el próximo sábado en el Encuentro Nacional por la Paz". Este evento tuvo lugar el 10.06 en el Hotel Alameda, con presencia de por lo menos 62 fuerzas sociales. Según informó el Comité, las conclusiones elaboradas durante el encuentro serán entregadas en fecha próxima al gobierno del Presidente Cristiani y al FMLN.

Durante los días previos y posteriores al traspaso de mando presidencial se ha desatado una ofensiva de pronunciamientos a favor del liberalismo económico, proveniente de sectores empresariales conservadores y de personeros del nuevo gobierno encabezado por el Presidente Alfredo Cristiani. Este último, surgido de un partido que sostiene ser nacionalista, en el discurso dirigido a la nación a raíz del traspaso de mando presidencial el 01.06, titula la sección dedicada a la economía como "La liberalización progresiva de la actividad económica", con lo cual bautiza lo que será el proceder del nuevo gobierno en materia económica.

Dicha sección del discurso presidencial se divide en dos partes. En primer lugar, tenemos todo aquello que se refiere al diagnóstico de la situación económica, en el cual se sostiene que "la guerra contra la economía" y "el reformismo de los llamados cambios estructurales" son las causas de la profunda crisis económica en que nuestro país se debate. De igual manera, ubica las raíces de la pobreza en estos dos mismos elementos, al describir a "un ser humano salvadoreño, inmerso en la crisis y en la violencia, víctima de la agresión marxista y del reformismo empobrecedor".

Esta interpretación de los orígenes de "la profunda crisis económica" es oscurecedora de la realidad en tanto que excluye toda una serie de factores determinantes de la crisis, tales como la concentración de la propiedad agrícola e industrial en unas pocas familias, la injusta distribución del ingreso nacional que de ello se deriva, el carácter excluyente y marginador de la dinámica de funcionamiento de la economía nacional y su tendencia natural al estancamiento, derivado de una estructura productiva desarticulada y trunca. Elementos todos, que han sido la causa y el origen de la crisis que vive el país, y cuya exclusión en cualquier diagnóstico hará que las medidas que de él se deriven no encaminen al país al logro de metas tan aprobables como las planteadas en el mismo discurso: "La meta principal de estos cinco años que se inician hoy ha de ser: Erradicar, en lo posible, la extrema pobreza, y establecer las bases sólidas y pacíficas de una sociedad donde todos tengamos oportu-

nidades de prosperar y de realizarnos como seres humanos.”

En segundo lugar tenemos las medidas que se propone implementar para solucionar los problemas del país. En este orden, el discurso está cargado de planteamientos neo-liberales, partiendo del mismo título. En esta orientación, se tratará de ir “reduciendo el papel del Estado a lo estrictamente social”, y se procurará que “el Estado estimule y racionalice el movimiento libre de las fuerzas económicas y sociales”. El discurso sigue en la misma línea: “liberalizaremos el comercio exterior”, “promoveremos una banca competitiva, en la que los sectores productivos vuelvan a tener el rol protagónico...Vamos a desregular la economía... a eliminar trabas y requisitos burocráticos... Queremos dejar muy en claro que al generar mayores libertades y terminar con las arbitrariedades, también debemos de olvidarnos de subsidios y prebendas... Iniciaremos un programa de apertura, que propicie la competitividad interna y que fomente las exportaciones... estamos dispuestos a trabajar ordenadamente para que los principios libertarios demuestren que producen beneficios materiales para todos.” En relación a la reforma agraria, por el contrario, hay cierta inclinación a reflejar el tono de prudencia con que fue construido el discurso en su totalidad, pues pasa a decir: “desmentimos una vez más, categóricamente, que queremos dar marcha atrás”, sino más bien iremos “hacia adelante permitiendo que el campesino del sector reformado elija la forma de propiedad que más le convenga, dentro del gran marco de libertades en el que se encuadrará toda la política de nuestro gobierno.”

De una u otra forma, todas estas medidas no hacen más que reproducir los planteamientos neo-liberales que han estado recorriendo el continente latinoamericano a lo largo de toda esta década. ¿Cómo puede decirse, en consecuencia, que dichas medidas surgen de una interpretación nacionalista de la economía? En todo caso, más bien parece que la interpretación que se hace del origen de la crisis económica no es más que una justificación para poder llevar a cabo en nuestro país las mismas medidas ultraconservadoras que responden a los designios de las instituciones financieras internacionales.

QUAYLE: En el curso de una rápida gira por el área, el vicepresidente de Estados Unidos, Dan Quayle, visitó el 13.06 El Salvador, tras realizar escalas previas en Guatemala y Honduras. Durante su breve estadía en El Salvador, por unas ocho horas, Quayle se reunió con el Presidente Cristiani en la residencia de éste, con quien se entrevistó a puerta cerrada en presencia del embajador William Walker. Tras ello, visitó a la viuda del Dr. José Antonio Rodríguez Porth para expresar sus condolencias. Al medio día, se entrevistó con el Alto Mando de la Fuerza Armada, donde le fue presentado el ingente arsenal de armas que la Fuerza Armada incautó recientemente en una casa de seguridad del FMLN en la ciudad capital. Al respecto, el vicepresidente declaró: “estas armas son de fabricación cubana; es material soviético que busca matar la democracia en El Salvador. Sabemos por donde llegaron estas armas. Vienen de Nicaragua y ayudan al terrorismo en El Salvador. Este es el problema, y si alguien tenía dudas, ahora quedan despejadas”. Asimismo, se reunió con el Dr. Fidel Chávez Mena, candidato presidencial del PDC en las pasadas elecciones de marzo, y con los dirigentes de la Convergencia Democrática, Dres. Guillermo Ungo y Rubén Zamora. Finalmente, al término de la visita, se trasladó en helicóptero desde la Escuela Militar al aeropuerto de Comalapa, donde abordó el avión que lo trasladaría a Costa Rica.

Más gestiones de la OEA en Panamá

Panamá continúa ocupando en estos días la atención de los observadores de los conflictos en América Central. Mientras el estancamiento de los dinamos de Esquipulas II y la espera de la realización de una muy incierta nueva cumbre presidencial mantiene latente la urgente necesidad de continuar avanzando en la pacificación del área, la comunidad internacional, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha centrado su interés en promover una pronta solución política a la crisis de Panamá (Proceso 385).

En el marco de acción determinado por ese objetivo, la OEA encomendó a los cancilleres de Ecuador, Guatemala y Trinidad y Tobago junto al propio Secretario General de la Organización, la misión de encontrar fórmulas y mecanismos aceptados por todas las fuerzas políticas panameñas que asegurarían una ordenada "transferencia del poder con el pleno respeto de la voluntad del pueblo", tras la anulación de las irregulares elecciones celebradas recientemente. La delegación diplomática estuvo en Panamá entrevistándose con todos los actores políticos del país y pudo experimentar lo contrapuesto e irreconciliable de las posturas mantenidas por la oposición y el gobierno (Proceso 386). Este hecho, naturalmente, adicionó nuevos obstáculos a la ya difícil misión mediadora.

El 6 de junio, la OEA celebró su XXI reunión de consulta con el expreso propósito de conocer el informe que los miembros de la delegación diplomática presentarían sobre el resultado de sus gestiones en Panamá. Paralelamente al encuentro oficial, los cancilleres del hemisferio efectuaron nuevamente intensas negociaciones privadas en la sede de la embajada de Colombia en Washington para limar las asperezas que

podrían enturbiar el desarrollo de la reunión de consulta. De hecho, los cancilleres estaban concientes de la inconveniencia de formular pronunciamientos apresurados y de condena al Gral. Noriega, dado que ello haría aún más difícil promover salidas concertadas a la crisis panameña. En este sentido, la OEA estaría buscando no sólo colaborar con la solución de tal problemática, sino ante todo evitar un fracaso diplomático que agudizaría su propia crisis de identidad.

El punto principal del informe presentado por los miembros de la misión negociadora al pleno de la OEA sostenía que en Panamá "existen posibilidades de entendimiento entre las partes en conflicto debido a que todas ellas coinciden en la factibilidad de la conciliación mediante fórmulas políticas basadas en mutuas concesiones". Por tanto, la misión negociadora solicitaba en ese mismo informe una ampliación del período de tiempo asignado para cumplir con el mandato de la organización interamericana. A la vez, solicitaba de la OEA un mayor respaldo para regresar a Panamá y formular propuestas concretas de solución a las fuerzas políticas del país. Ambas solicitudes fueron concedidas por el pleno de los cancilleres —con excepción del de Nicaragua, quien ve en la resolución del organismo continental una actitud injerentista en los problemas internos de Panamá— y establecieron como fecha límite para esas gestiones el 19 de julio.

La oposición política interna de Panamá reaccionó con desencanto y desaprobación ante la resolución de la OEA. El candidato a la segunda vicepresidencia por la coalición opositora, Guillermo Ford, se declaró "sumamente decepcionado de la prórroga tan larga que ha otorgado la OEA" a la misión

diplomática. Según Ford, si la oposición lograra establecer "un diálogo de altura con quienes detentan el poder real, las Fuerzas de Defensa, estoy seguro de que en 24 horas encontraríamos la solución y no necesitaríamos de seis semanas, un plazo excesivamente largo para la angustia que está viviendo este pueblo". En esta misma línea se pronunció Ricardo Arias, candidato a la primera vicepresidencia, al manifestar que la decisión de la OEA "no satisface, ni responde a las expectativas de nuestro pueblo". En cambio, la reacción del gobierno ha sido de mayor aceptación. El candidato oficialista a la presidencia, Carlos Duque, sostuvo que el gobierno siempre estaría dispuesto a cooperar con la misión de la OEA.

En la mayoría de los cancilleres se trasluce un prudente optimismo sobre las posibilidades de que la misión diplomática logre construir una solución "pacífica y democrática" para el problema panameño. De hecho, el jefe de la misión, el canciller de Ecuador, Diego Cordovez, es un hábil y prestigioso negociador que cuenta entre sus éxitos diplomáticos más notables el acuerdo en virtud del cual las tropas soviéticas abandonaron Afganistán. Para Cordovez, la crisis panameña "compromete la dignidad de toda Latinoamérica, pero —afirma— son los propios panameños quienes deben resolver la situación de su país". En este sentido, sostiene que "lo más urgente, en este momento, es el establecimiento de un mecanismo que permita a los panameños ir conversando y negociando". El canciller ecuatoriano considera asimismo que existe una "buena disposición de lado y lado, y esta buena disposición tiene que irse traduciendo ahora en pasos específicos".

Mientras la OEA ha puesto todo su carisma conciliador en la solución de la crisis panameña, el gobierno norteamericano —uno de los responsables directos del caos reinante en Panamá— ha continuado promoviendo el aislamiento del régimen del Gral. Noriega. En el desarrollo de la segunda gira por países latinoamericanos del vicepresidente norteamericano, Dan Quayle, se ha ratificado la importancia geopolítica de primer orden que el gobierno del presidente Bush concede al istmo centroamericano. Quayle ha visitado, entre el 11 y 14 de junio, todos los países del área con excepción de Nicaragua. El propósito fundamental de dicho periplo, al parecer, habría sido el transmitir a los gobiernos del área las expectativas del gobierno estadounidense respecto al futuro de los dinamisismos aún esperados de Esquipulas, especialmente de cara a la celebración de elecciones generales en Nicaragua a principios del próximo año. No obstante, a lo largo de su gira, el vicepresidente norteamericano en sus declaraciones a la prensa casi no se ha referido al conflicto en Nicaragua. En cambio, las referencias críticas al gobierno de Panamá han estado a la orden del momento. Quayle, desde su primera escala en Guatemala, manifestó que "Noriega es el enemigo de la democracia. No ha respetado los resultados electorales y nuestra posición ha sido clara: Noriega tiene que irse del gobierno de Panamá".

La OEA enfrenta su más grande reto, desde la crisis de las Malvinas, en la promoción de una solución diplomática al conflicto en Panamá. Un fracaso en estas gestiones podría significar un revés irreversible para el organismo interamericano.

PRESENTACION

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significativos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales.

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e Información de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".

SUSCRIPCION ANUAL

El Salvador	
personal	¢ 50.00
correo	¢ 60.00
Centroamérica y Panamá	\$ 25.00
Norte y Sur América	\$ 35.00
Europa	\$ 40.00
Otras regiones	\$ 45.00

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana y dirigirse a Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 236375 y 240011 Ext. 161 y 191.

